

Posibilidades de una salida política al conflicto de Colombia

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar

Además de los problemas históricos del país producto de la injusta distribución de la riqueza, se añaden: el terrible flagelo del narcotráfico que permeó con su ética todos los estamentos de la sociedad y la violencia generalizada de diferente índole que amenazó con desbordar la estabilidad institucional, agravada con la oscura perspectiva que augura el nuevo orden mundial y la defensiva del movimiento popular en general, ponen a nuestro pueblo en una de las coyunturas más complejas del presente siglo.

Narcotráfico

El poderoso monopolio del narcotráfico ingresa al país 2.000 millones de dólares, suficientes para corromper y manipular todas las estructuras del Estado y financiar los grupos de sicarios y paramilitares aliados de los sectores más retrógrados del gobierno, quienes proporcionan la información y los entrenan para el exterminio físico de los dirigentes populares, democráticos y revolucionarios.

El poder político-económico y militar de la narcoburguesía logra enquistarse en sectores del gobierno, en la cúpula de las Fuerzas Armadas, la policía y los órganos de seguridad, políticos de los partidos tradicionales inescrupulosos, senadores del Congreso, grandes empresarios y terratenientes que se siguen enriqueciendo con el negocio de la droga.

Las aspiraciones de la narcoburguesía para aumentar su poder político en el país llevaron al enfrentamiento violento entre ésta y la burguesía tradicional. Enfrentamiento que adquirió características de guerra interna y que ha generado en el país una crisis total, especialmente en la justicia y una saturación de terror y violencia en la sociedad colombiana.

Esta contradicción entre estos dos sectores ante la imposibilidad de resolverse militarmente, exigía una salida negociada - que generó ciertas fisuras en las relaciones EE.UU.-Colombia -, ya que el gobierno precisa mostrar un clima de estabilidad y de confianza a nivel internacional, que estimule la inversión extranjera, y necesita también de los dineros del narcotráfico para el impulso a la economía nacional. Los

marcos por su parte necesitan darle estabilidad a sus negocios y recuperar el prestigio que venían perdiendo. En las largas negociaciones «clandestinas» entre gobierno y extraditables, estos lograron importantes concesiones de parte del gobierno: no a la extradición, rebaja de penas, garantías procesales, cárceles de lujo, sus negocios y propiedades intocables.

Internacionalización de la economía

La nueva etapa que inaugura el capital transnacional, producto de la revolución científico-técnica y de la crisis de rentabilidad del gran capital, pone a nuestros pueblos en condiciones de miseria comparables al capitalismo salvaje.

El nuevo modelo que propone el imperialismo a través de sus organismos FMI y BM enfrenta a toda la sociedad y obliga a los países desarrollados a diseñar una metodología que aclimate las condiciones necesarias para implementar la política neoliberal que generaliza el capitalismo contemporáneo con altos costos para todos los pueblos, quienes se verán totalmente desvalidos ya que la poca asistencia que recibían por parte del Estado se corta aún más. El desmonte del Estado de bienestar y el desmantelamiento del Estado empresario, para transferirlo a la iniciativa privada, profundizará la dependencia, afectará el desarrollo económico e irá en menoscabo de las condiciones de vida de las amplias masas populares.

Al actual presidente César Gaviria le toca seguir los dictados del capitalismo desarrollado. Representante de la nueva derecha que necesita la fase cualitativamente diferente del capital y fiel servidor de las órdenes imperiales, su principal preocupación en este momento es cómo insertar el país en el modelo de internacionalización de la economía a cualquier costo. Para esto los paramilitares, la concertación, las concesiones que neutralizan o silencian grupos opositores y en general los instrumentos políticos o militares que tiene a su servicio, serán los medios más importantes para adelantar con éxito la gestión propuesta. El M-19 será su principal puntal en este propósito, compartiendo la administración de la crisis.

Asamblea Nacional Constituyente

La Constituyente como el hecho político más importante de los últimos años, se convierte en el movimiento popular de más alcance en el país. Surge en momentos en que el país está al borde del caos y la anarquía incontrolada, y sirve para, en principios sentar al país a buscar una salida negociada en un nuevo pacto social.

Con diferentes alcances y perspectivas todos los sectores gremiales y políticos toman esta bandera y la Asamblea Nacional Constituyente - ANC - se convierte en el escenario político donde se podían discutir algunos acuerdos que permitieran una solución civilizada a los graves problemas del país. La ANC sólo ha reflejado hasta hoy la correlación de fuerzas a su interior, donde los intereses populares no sólo están en desventaja sino en retroceso.

De hecho, las fuerzas mayoritarias que hacen parte del gobierno desde el primer momento hicieron pacto al estilo «Kupia kumis» nicaragüense, que en Colombia se llamó el nuevo frente nacional (el Partido Liberal, el Partido Social conservador, La Alianza Democrática M-19 y el ultraderechista Movimiento de Salvación Nacional, fueron los pactantes para restringir y quitarle toda la soberanía a la Constituyente).

Sin duda podemos resaltar algunos aspectos positivos que se logran en el marco de la ANC: la circunscripción especial para los indígenas, la no extradición como precepto constitucional, la revocatoria del mandato y las elecciones para un nuevo congreso (desde ya, dejando totalmente en manos del Ejecutivo hasta diciembre del presente año las decisiones de la vida nacional), la creación de la vicepresidencia y la segunda vuelta para la elección presidencial son, entre otras, las más importantes medidas adoptadas para modernizar el caduco sistema político colombiano.

Sin embargo, los aspectos reales del poder han sido dejados intactos y en algunos casos se han fortalecido: las Fuerzas Armadas son el caso más patético; la izquierda exigía profundas reformas, nada prosperó, por el contrario: la fuerza pública quedó dependiendo del Ministerio de Justicia, conformándose otra división que va a ser la policía militarizada, igualmente la rama judicial perdió su poca autonomía al crearse la Corte Constitucional y la Fiscalía General de la Nación, que en definitiva no es más que el desarrollo de Santa Fe II, donde se recomienda que la justicia sea controlada por el Ejecutivo y concretamente por los órganos de seguridad con la finalidad de garantizar que sus instituciones no tengan cuestionamientos.

La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar - CGSB - sigue considerando la Asamblea Nacional Constituyente como un espacio importante donde se puede pactar la paz entre los colombianos.

La CGSB no puede estar ausente en este nuevo pacto social por los intereses que representa y su presencia en amplios sectores de la población. Por esto ha insistido permanentemente en la participación en este foro. Sin embargo, el bombardeo al

secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC -; los sistemáticos operativos contra la dirigencia de las fuerzas de la Coordinadora en busca de una victoria militar; y los permanentes obstáculos al diálogo, muestran la abierta oposición de los sectores más retardatarios de la sociedad colombiana a su presencia, ya que inclinaría la correlación de fuerzas en la ANC, en favor de los intereses populares.

De lo contrario, la Asamblea Nacional Constituyente se convertirá en la nueva superestructura ideológica que necesitan las nuevas relaciones de producción y el modelo económico neoliberal, ya que la correlación de fuerzas sigue estando a favor de las políticas antipopulares y sólo la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar expresa las posibilidades de defender las conquistas logradas en tantos años de lucha heroica y levantar propuestas soberanas, democráticas y dignas, en este difícil y complejo panorama de ofensiva imperial.

Negociación CGSB-gobierno

La conquista de la paz es hoy el objetivo máspreciado de la humanidad. Pero la paz no es solamente la ausencia de lucha y conflicto, es además justicia, igualdad, democracia y eliminación de toda clase de explotación económica, política e ideológica entre los hombres y las naciones.

La razón de ser de la guerrilla colombiana no es la violencia. Es la respuesta originada en defensa de la vida y luego constituida en alternativa de transformación social.

Las verdaderas causas del actual conflicto armado en Colombia se encuentran en la desnaturalización de la democracia, restringida y sustentada en un espíritu de arrogancia y autoritarismo en el que no encuentran aire las aspiraciones de cambio, de participación e identidad del pueblo colombiano. Una democracia que descansa en el estado de sitio (de emergencia) perenne, el acrecentado papel de las Fuerzas Armadas y la militarización de la vida nacional, cuya inspiración sigue siendo, a estas alturas del siglo, la doctrina de la Seguridad Nacional que identifica como terrorismo todas las formas de protesta social.

La oligarquía colombiana, el capital transnacional y el Pentágono quieren impedir a toda costa un proceso democratizador que toque las mayores barreras estructurales a la convivencia nacional como son la apertura económica y sobre todo la militarización de la vida nacional.

Desde su surgimiento, la guerrilla colombiana, y en particular la Coordinadora Simón Bolívar, ha insistido en el diálogo como vía de solución al conflicto armado que se desarrolla en el país, pero la oligarquía ha preferido siempre la violación o la exigencia de la rendición.

Ahora, desde Caracas, queremos contribuir a despejar caminos, hallar en el horizonte fórmulas y alternativas que se tornen viables, no soluciones efímeras sino salidas de fondo. Nos preocupa la defensa de la soberanía nacional y el manejo de los recursos naturales del país. Creemos necesario definir criterios válidos para que el desarrollo económico no resulte evasivo a la justicia social, los intereses y la dignidad patria. Debemos también resolver el problema de la integración de las minorías étnicas a la vida democrática de la nación, con pleno respeto a sus tradiciones, formas de organización y cultura.

La oportunidad histórica de avanzar hacia una solución política del conflicto interno e iniciar un camino de real democratización del país y de paz duradera viene siendo irresponsablemente desperdiciada por la oligarquía colombiana. Antes de pensar en el interés nacional este grupo se ha preocupado de no perder sus prerrogativas; trata de superar su crisis de la mano de las fuerzas en que importantes sectores sociales han depositado esperanzas de renovación. Al mismo tiempo desata una feroz ofensiva militar contra el cuartel central de las FARC y demás zonas de influencia guerrillera, continúa la ola de asesinatos contra dirigentes y activistas de izquierda, incluidas las fuerzas desmovilizadas y demás sectores que conforman la ADM-19.

Una vez más la respuesta popular, expresada esta vez en el accionar militar contundente de los destacamentos guerrilleros del pueblo, obligó al gobierno de Gaviria a ceder y a aceptar el diálogo con la Coordinadora en la búsqueda de una solución política real y no formal al producto interno. Las negociaciones que se adelantan en Caracas son la cara mas difícil pero quizás más necesaria de la democratización que reclama Colombia, porque apunta a desatar los nudos estructurales que nos impiden desarrollarnos como nación soberana, libre y democrática.

La principal condición para que este paso crucial dé frutos es que el gobierno colombiano comprenda que no se trata de dialogar con una guerrilla derrotada o desmoralizada en vías de capitular, sino que se enfrenta a una fuerza del pueblo que busca soluciones de fondo a los problemas nacionales, que lucha por la representación de los intereses populares en la nueva nación que se plantea construir, que no está buscando prebendas económicas, políticas o sociales como precio para su doc-

lidad, y que está de verdad empeñada en soluciones nacionales para una nación cuya mayoría ha sido por centurias olvidada cuando no despreciada.

Repetir procesos negociadores anteriores que culminaron con la desmovilización y entrega de armas, no es más que aceptar el nuevo modelo de democracia que quiere imponer la oligarquía: un nuevo pacto político entre todas aquellas fuerzas que estén dispuestas a participar en una democracia formal que no toque los impedimentos principales de la participación popular, como son el militarismo, los monopolios y los intereses norteamericanos. Todas las fuerzas democráticas y populares que participen en dicho pacto lo harán siempre con un arma apuntando a sus cabezas, esperando cualquier exceso para activar el gatillo. La guerra sucia ha demostrado en Colombia su eficacia como política contrainsurgente.

Solucionar el conflicto armado en nuestro país de una manera profunda, y que en verdad pueda dividir la historia nacional en dos - antes y después de los intermitentes conflictos armados - significa adelantar un proceso de verdadera democratización del país, que toque los factores estructurales que han originado el conflicto bélico e instaure un nuevo régimen político que exprese y desarrolle dicha democratización y permita la tan anhelada paz duradera que reclamamos todos los colombianos, que no puede ser otra que la paz con justicia social.

Se trata de un verdadero acuerdo nacional que posibilite mínimamente la convivencia que siente las bases del desarrollo como nación soberana independiente y democrática, que le permita al pueblo una vida digna y al menos seguridad de que si tiene futuro, ¡que vale la pena vivir!

Pero ese acuerdo mínimo implica cambios estructurales mínimos también, pero decisivos. La CGSB los ha condensado en seis puntos fundamentales:

Democracia . Participación de las mayorías en las decisiones de Estado, desmonte del régimen autoritario del estado de sitio.

Desmilitarización . Que se construyan nuevas fuerzas armadas al servicio de la democracia y la soberanía nacional, erradicando la doctrina de Seguridad Nacional, garantizando el castigo a los responsables de los magnicidios, reducción de su presupuesto y efectivos.

Autodeterminación nacional . Soberanía nacional en el manejo de los recursos naturales, en las relaciones con el capital extranjero y la definición de las políticas eco-

nómicas. Suspensión de los tratados internacionales lesivos a los intereses de la nación, y derogatoria del tratado de extradición.

Política económica independiente y de bienestar social . Democratización de esta política para que apunte a desarrollar las fuerzas productivas del país priorizando la mejora de las condiciones de vida de la población colombiana, que sea una alternativa al actual modelo neoliberal de costos sociales y nacionales incalculables.

Integración multiétnica y pluricultural . Integración de las minorías étnicas a la vida democrática de la nación, con pleno respeto a sus tierras, formas de organización y cultura.

Política internacional autónoma y de integración latinoamericana . Establecimiento de una política internacional autónoma, independiente de los centros de poder, que propugne por la integración latinoamericana, acogiendo el derecho internacional humanitario y los convenios y protocolos de Ginebra.

Como lo expresara de manera clara la delegación de Amnistía Internacional ante la Asamblea Nacional Constituyente, mientras las Fuerzas Armadas continúen su política de guerra sucia, sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad en medio de la total impunidad, no habrá posibilidades de acuerdo nacional.

No se presta servicio alguno a la democracia ocultando la verdad del genocidio a que está siendo sometido el pueblo colombiano, la entrega que de nuestros recursos se está haciendo al capital norteamericano, o los efectos nefastos que para la inmensa mayoría de la población significa la actual política económica neoliberal. La paz de los vencidos o de los sepulcros no funciona en Colombia, porque si algo ha demostrado nuestro pueblo a lo largo de su historia es que tiene principios éticos, decisión de vivir con dignidad y de combatir, cueste lo que cueste, la injusticia.

La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar adelanta en este momento ingentes esfuerzos para llevar a feliz término la voluntad popular de cambios estructurales en nuestro país y de hacer que esta Constituyente y este nuevo diálogo no sean una nueva esperanza perdida para los pobres de Colombia y América Latina, y sea escenario de la real democratización que reclaman las mayorías.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad N° 117 Enero-Febrero de 1992, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.